- 2) La imputación concreta debe ser entendida como la “vinculación entre un hecho y una persona, realizada sobre la base de una norma. Asimismo, ha referido la defensa técnica que el tipo penal es el referente normativo para la construcción de proposiciones fácticas, ya que, cada uno de los elementos del tipo exige la realización fáctica y ésta es presentada en la imputación penal con proposiciones fácticas. Por lo que solicita se le requiera al Ministerio Público precise cual es la imputación concreta se le atribuye a su patrocinada, a fin de que puedan ejercer su derecha de defensa.

A su turno, el representante del Ministerio Público manifestó que en la Disposición No 04 de fecha 13 de octubre de 2023, se precisa cual es el grado de participación de la investigada [REDACTED], indicando que en la disposición N° 3 del 3 de agosto de 2023 se ha especificado la conducta ilícita desplegada por la imputada [REDACTED] quien entre mayo de 2011 y junio de 2014, la imputada [REDACTED] bajo el cargo de Directora General de la SEDE LIMA de la Universidad Privada Los Ángeles, mediante engaño, conjuntamente con sus coimputados Fernando Orrego Diaz bajo el cargo de profesor – Secretario General y Cesar Augusto Ramírez Valdez bajo el cargo de Secretario académico de la entidad cuestionada (y los fallecidos Victorino Cano Meneses y Santos Jaime Vega Corcuera quienes ostentaban los cargos de Rector y Vicerrector respectivamente habrían inducido y mantenido en error a los agraviados , con el subsecuente perjuicio económico; siendo que a este efecto habrían tramitado y otorgado el diploma de egresado, el Grado Académico de Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas y el Título de abogado al agraviado Bonifacio Sabino Vera Córdova y el Grado Académico de bachiller en Derecho y Ciencias Políticas y el título de Abogado al agraviado Pedro Antonio Castillo Gutiérrez, por lo cual fueron efectuados cobros indebidos; procurándose así los denunciados un provecho ilícito por la obtención de dichos grados y títulos profesionales; habiendo actuado a sabiendas de que los referidos títulos carecían de todo valor legal; por cuanto la Universidad Privada Los ángeles no contaba con autorización para su funcionamiento; por otro lado señala el Ministerio Público que se tiene la declaración de Bonifacio Sabino Vera Córdova quien señalo que efectuó pagos por un total aproximado de S/. 3400.00 soles, para la obtención final del grado académico de Bachiller y del título de abogado, precisando que la imputación que se realiza a la investigada [REDACTED] es en calidad de coautores en el extremo del delito de estafa agravada, ello al haber actuado de manera conjunta con sus coinvestigados, y además que la citada investigada actuó en su calidad de Directora General de la Universidad la cual no contaba con la autorización correspondiente de funcionamiento.

TUTELA DE DERECHOS

Es pertinente efectuar las siguientes precisiones:

- 1) El modelo procesal penal incorpora una institución de notable incidencia garantista, como es la “audiencia de tutela de derechos”, que encuentra plena legitimidad en un sistema encaminado a reforzar los derechos y garantías que el entramado normativo consagra a lo largo de su listado legal.¹ Es decir, el imputado tiene expedita una específica garantía de tutela jurisdiccional, concebida como una protección jurisdiccional especial a cargo del Juez de la investigación preparatoria frente a las actuaciones de persecución penal, que o tengan origen jurisdiccional².
- 2) La finalidad esencial es la protección, resguardo y consiguiente efectividad de los derechos del imputado reconocidos por la Constitución y las leyes, consiste además que el juez determine, desde la instancia y actuación de las partes la vulneración al derecho garantía constitucional prevista en la norma y realice un acto procesal dictando una medida de tutela correctiva que ponga fin al agravio.
- 3) Los derechos protegidos son los que se encuentran recogidos taxativamente en el artículo 71° del Código Procesal Penal, como son:
 - a) Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra, cuando corresponda.
 - b) Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata.
 - c) Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor.
 - d) Abstenerse de declarar y, si acepta hacerlo, a que su abogado Defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere su presencia.
 - e) Que no se emplee en su contra medidas coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restitución no autorizada ni permitido por ley.
 - f) Ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de la salud, cuando su estado de salud así lo requiera

¹ PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl, Manual de Derecho Procesal Penal, Cuarta Edición, editorial Instituto Pacifico S.A.C . febrero 2016, Lima – Perú – Pag. 273.

² SAN MARTIN CASTRO, Cesar. Derecho procesal Penal. Lecciones, editorial INPCCP y CENALES, Primera Edición, Noviembre 2015, Lima-Perú. Pág. 238.

- 4) Asimismo, el numeral 4 del artículo 71 del Código Procesal Penal, establece que “cuando el imputado considera que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, o que sus derechos no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela de derecho al Juez de la Investigación Preparatoria (...)” De la interpretación de la norma en cuestión, advertimos que la tutela del Juzgado de Investigación Preparatoria no se limita a los derechos descritos textualmente en la norma sino que también comprende otros que guardan relación con aquellas y los derechos fundamentales del imputado que no tienen vía propia, en la etapa procesal pertinente.
- 5) Ahora bien, el acuerdo Plenario N° 04-2010/CS-116, de 16 de noviembre de 2020, establece que esta institución procesal penal es por tanto uno de los principales mecanismos para realizar el control de legalidad de la función fiscal, quien deberá conducir y desarrollar toda su estrategia persecutoria siempre dentro del marco de las garantías básicas, siendo consciente que cualquier acto que traspase el marco de los derechos fundamentales podrá ser controlado por el Juez de Investigación preparatoria; asimismo la audiencia de tutela de es residual, esto es opera siempre que el ordenamiento procesal no especifique un camino determinado para la reclamación de un derecho afectado. Por lo tanto, aquellas requerimientos o disposiciones fiscales que vulneren derechos fundamentales pero que tienen vía propia para la denuncia o control respectivo, no podrán cuestionarse a través de la audiencia de tutela.
- 6) Siendo, así el objeto de esta garantía procesal abarca tres ámbitos: a) el derecho de información de los derechos legalmente reconocidos y su concreción en un acta, previstos en el apartado 2 del artículo 71 del Código Procesal Penal, b) El reconocimiento y efectividad de los derechos legales, que obviamente son aquellos seis fijados en los artículos 71 numeral 2 y 87 del Código Procesal Penal, y c) La imposición de medidas limitativas de derechos indebidas a o de requerimientos ilegales.

ANALISIS DEL CASO CONCRETO

PRIMERO: El abogado defensor de la investigada [REDACTED], solicita tutela de derechos, básicamente porque según alegaciones el Cuarto Despacho Provincial de la Séptima Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima – Breña – Rímac – Jesús María, a cargo de la presente investigación preliminar, en la disposición N° 03, de fecha 03 de agosto de 2023, así como en la disposición N° 04, de fecha 13 de octubre de 2023, habría vulnerado su derecho a ser informado de manera detallada y precisa sobre la imputación con respecto al delito de estafa agravada. Según la defensa técnica, el Ministerio Público no ha detallado de manera individualizada la

participación en los hechos materia de imputación del Ministerio Público del delito de estafa agravada, no señala que es lo que hizo su patrocinada, únicamente realiza una imputación de manera genérica; si bien la imputación es a título de coautoría; sin embargo se debe tener en cuenta que el delito de estafa es un delito de dominio, sin embargo el Fiscal no indica cual es el aporte esencial que realizó su patrocinada, más aún si existe una pluralidad de imputados, siendo importante la imputación fáctica independiente, lo que afecta su derecho a conocer la imputación de manera clara y detallada, lo que a su vez impide ejercer adecuadamente su derecho de defensa.

SEGUNDO: Previamente a emitir el pronunciamiento de fondo debe efectuarse las siguientes precisiones:

2.1 Para que éste órgano jurisdiccional esté habilitado para emitir un pronunciamiento sobre la solicitud de tutela de derechos planteada, debe verificarse que la defensa técnica de la investigada [REDACTED], haya hecho prevalecer sus derechos ante el representante del Ministerio Público a cargo de la investigación – (sea preliminar o preparatoria), de conformidad con el numeral q del artículo 71 del Código Procesal Penal.

2.2 En el caso concreto, en cuanto a la solicitud de tutela, está acreditado que mediante escrito de fecha 01 de setiembre de 2023, la defensa técnica de la investigada solicitó al representante del Ministerio Público, se precise la imputación concreta, respecto a la investigada, el mismo que fue resuelto mediante Disposición N° 03, de fecha 03 de agosto de 2023, sin embargo como ya lo ha referido la defensa técnica al inicio de la presente audiencia, únicamente en el extremo del delito de estafa agravada el Ministerio Público no ha cumplido con individualizar la participación de su patrocinada, no ha señalado cual habría sido el aporte que realizó su patrocinada para que se le puede imputar el delito de estafa agravada, tanto más si la imputación es a título de coautoría.

TERCERO: La finalidad esencial de la audiencia de tutela es la protección, resguardo y consiguiente efectividad de los derechos del imputado reconocidos por la Constitución y las leyes. Desde esta perspectiva, el Juez de la Investigación Preparatoria se erige en un Juez de garantías durante las diligencias preliminares y la investigación preparatoria ejerciendo su función de control de los derechos, ante la alegación del investigado, de que se produjo la vulneración de uno a varios de sus derechos reconocidos específicamente en el artículo 71° del Código Procesal Penal, responsabilizando al Fiscal o a la Policía del agraviado. En otras palabras, su finalidad esencial consiste en que el Juez determine, desde la instancia y actuación de las partes, la vulneración del derecho o garantía constitucional prevista en la citada norma y realice un acto procesal dictando una medida de tutela correctiva que ponga fin al agravio.

CUARTO: si bien, los actos de investigación realizados por el Ministerio Público gozan de amparo legal por tratarse de la autoridad pública encargada de la persecución del delito, ello no implica que sean inatacables o incuestionables, puesto que han de sujetarse a la ley y al principio de objetividad .

QUINTO: Ahora, de a revisión de la disposición fiscal antes citada, en cuanto a la descripción de los hechos materia de investigación, se consigna lo siguiente : *indicando que en la disposición N° 3 del 3 de agosto de 2023 se ha especificado la conducta ilícita desplegada por la imputada [REDACTED], quien entre mayo de 2011 y junio de 2014, la imputada [REDACTED] bajo el cargo de Directora General de la SEDE LIMA de la Universidad Privada Los Ángeles, mediante engaño, conjuntamente con sus coimputados Fernando Orrego Diaz bajo el cargo de profesor – Secretario General y Cesar Augusto Ramírez Valdez bajo el cargo de Secretario académico de la entidad cuestionada (y los fallecidos Victorino Cano Meneses y Santos Jaime Vega Corcuera quienes ostentaban los cargos de Rector y Vicerrector respectivamente habrían inducido y mantenido en error a los agraviados , con el subsecuente perjuicio económico;; siendo que a este efecto habrían tramitado y otorgado el diploma de egresado, el Grado Académico de Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas y el Título de abogado al agraviado Bonifacio Sabino Vera Córdova y el Grado Académico de bachiller en Derecho y Ciencias Políticas y el título de Abogado al agraviado Pedro Antonio Castillo Gutiérrez, por lo cual fueron efectuados cobros indebidos; procurándose así los denunciados un provecho ilícito por la obtención de dichos grados y títulos profesionales; habiendo actuado a sabiendas de que los referidos títulos carecían de todo valor legal; por cuanto la Universidad Privada Los ángeles no contaba con autorización para su funcionamiento; por otro lado señala el Ministerio Público que se tiene la declaración de Bonifacio Sabino Vera Córdova quien señalo que efectuó pagos por un total aproximado de S/. 3400.00 soles, para la obtención final del grado académico de Bachiller y del título de abogado, precisando que la imputación que se realiza a la investigada [REDACTED] es en calidad de coautores en el extremo del delito de estafa agravada, ello al haber actuado de manera conjunta con sus coinvestigados, y además que la citada investigada actuó en su calidad de Directora General de la Universidad la cual no contaba con el autorización correspondiente de funcionamiento.*

SEXTO: si bien el Representante del Ministerio Público en audiencia ha señalado que la imputación que se realizada contra la investigada [REDACTED], es a título de coautora, toda vez que en su condición de Directora General de la Universidad Privada Los Angeles , SEDE En Lima, **mediante engaño** conjuntamente con sus coimputados Fernando Orrego Díaz bajo el cargo de Profesor – Secretario General y Cesar Augusto Ramírez Valdez bajo el cargo de Secretario Académico de la entidad cuestionada y los fallecidos Victorino Cano Meneses y Santo Jaime Vega Corcuera quienes ostentaban el cargo de Rector y Vicerrector respectivamente, **habrían inducido y mantenido en error** a los agraviados con el subsecuente perjuicio económico. Señalando además que la imputación que se consigna en la disposición N° 03 , está clara , y que la imputación que se realiza a la imputada es de manera conjunta , de acuerdo al cargo que cada uno de ellos realizaba.

SEPTIMO: De la revisión de la disposición N° 03, y 04, la respuesta dada a través de dichas disposiciones y las alegaciones efectuadas en audiencia pública, se aprecia que el Ministerio Público no ha cumplido con detallar los hechos objetos de imputación, la conducta desplegada de manera individualizada, y cuales serían elementos de convicción que la vincularían con los hechos materia de imputación, toda vez que en las disposiciones mencionadas se consignan

únicamente de manera generalizada lo siguiente **“que mediante engaño y de manera conjunta con sus coinvestigados , la investigada habría inducido y mantenido en error a los agraviados”**, en tal sentido es pertinente que el Ministerio Público precise la imputación respecto a la conducta realizada por la investigada, más aun si en la misma se indica que ésta habría actuado de manera conjunta con sus coimputados ; por otro lado, es pertinente tener en cuenta respecto a la imputación necesaria, los tres requisitos que mínimamente deben cumplirse para la observancia del principio de imputación suficiente; siendo uno de ellos el requisito fáctico; el cual guarda relación con el relato circunstanciado y preciso de los hechos con relevancia penal que se le atribuye a una persona; el Requisito normativo, la misma que debe tomarse en cuenta cuando existe la pluralidad de imputados , ello con el fin de determinar de manera adecuada cada una de las acciones con presunta relevancia penal y su correspondiente nivel de intervención³, así como la necesidad de motivación de la imputación en todos sus elementos y requisitos estructurales es un presupuesto constitucional indubitable . En consecuencia, ante la omisión del detalle de los hechos por el Cuarto Despacho Provincial de la Séptima Fiscalía Corporativa penal de Cercado de Lima – Breña – Rímac – Jesús María, que vulneran el derecho de defensa de la investigada [REDACTED], específicamente la vulneración del derecho a ser informada de manera detallada y precisa sobre la imputación en cuanto a la conducta desplegada e individualizada de los hechos objeto de imputación a nivel de investigación preliminar . Por tales razones la tutela de derecho solicitada deviene en fundada, debiendo concederse el plazo de días hábiles para que el representante del Ministerio Público subsane la omisión de imputación fáctica en la disposición fiscal materia de cuestionamiento, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución y cumpla con formular las proposiciones fácticas correspondientes.

Por los fundamentos expuestos el Vigésimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima – Sede Central **RESUELVE**:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la tutela de derechos solicitada por la defensa técnica de [REDACTED] en la investigación preliminar seguida por la presunta comisión del delito Contra El Patrimonio – Estafa Agravada y otros, en agravio de Bonifacio Sabino Córdova y otros.

SEGUNDO: REQUERIR al Cuarto Despacho Provincial de la Séptima Fiscalía Corporativa penal de Cercado de Lima – Breña – Rímac – Jesús María, que en el plazo de **DIEZ DIAS HABLES** proceda a subsanar la omisión de imputación fáctica de la disposición N° 04 (disposición aclaratoria) de fecha 13 de octubre de 2023, y formule las proposiciones fácticas que corresponden a los parámetros establecidos en la presente resolución. **NOTIFICANDOSE** conforme a Ley.

³ R.N N° 2823-205 – VENTANILLA – SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA